El pliego de condiciones, Memorias, proyectos, planos y demás antecedentes se hallan de manifiesto, en la Secretaría del Ayuntamiento, durante los días hábiles y horas de oficina, hasta el día anterior a la subasta.

Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 de la subasta para la provisional y 4 por 100 para la definitiva.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Hasta las doce horas del día en que se cumplan los veinte hábiles, contados a partir del siguiente al en que se publique este edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Dichas proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento.

Lugar, día y hora de la subasta: En la Casa Consistorial de esta villa, al día siguiente del señalado para la presentación de las proposiciones y a las trece horas, en cuyo momento serán abiertos los sobres.

Las propuestas serán reintegradas con timbre de esta provincia de seis pesetas, no admitiéndose postura que no acepte íntegramente todas las peticiones de los pliegos de condiciones facultativas y económicas, corriendo de cuenta del contratista los gastos de anuncio y cuantos ocasione la subasta y formalización del contrato.

Los pliegos a presentar por los licitadores serán dos, cerrados, pudiendo ser lacrados y precintados, y en los que figurará la inscripción: «Proposición para tomar parte en el concurso-subasta de las obras de pavimentación de Villarreal de Alava».

El sobre que encierre el primer pliego se titulará «Referencias», e incluirá una Memoria firmada por el proponente, expresiva de sus referencias técnicas y económicas, detalle de las obras análogas realizadas con anterioridad, elementos de

trabajo de que disponga y demás circunstancias que se exijan en esta convocatoria, con los pertinentes documentos acreditativos, el documento que justifique la constitución de la garantía provisional y una declaración en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad no hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad señalados por los artículos cuarto y quinto del Reglamento de Contratación, de 9 de enero de 1953, carnet de responsabilidad y justificante de encontrarse al corriente en el pago de la contribución industrial y seguros sociales.

El sobre que encierre el segundo pliego llevará la misma inscripción del primero, pero con el subtítulo «Oferta económica», e incluirá proposición con arreglo al modelo que al final se inserta, en la que el licitador se limitará a concretar el tipo económico de la postura.

Modelo de proposición:

Don (edad, estado, profesión), con domicilio en, en nombre propio (si es Sociedad, en representación de la misma), bien enterado de los pliegos de condiciones y demás documentos relativos al proyecto, se compromete a llevar a cabo la realización total de las obras, consistentes en las que se detallan en el correspondiente presupuesto de contrata, con arreglo a los precios unitarios del mismo, repañados éstos en un (tanto por ciento) (se expresará la cantidad en letra).

Villarreal de Alava, de de 196.....—El proponente (firma).

Villarreal de Alava, 16 de abril de 1961.—El Alcalde, Guillermo Beitia.—1.557.

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA

Sentencias

En la villa de Madrid a 5 de diciembre de 1960; en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón y ante la Sala de Vacaciones de la Audiencia Territorial de Oviedo, por doña Gregoria Rubio Vega, dedicada a sus labores, con don Leonardo Muñoz Bastida, industrial, ambos vecinos de Gijón, sobre resolución de contrato de arrendamiento; autos pendientes hoy ante esta Sala en virtud de recurso por injusticia notoria interpuesto por el demandado señor Muñoz, representado por el Procurador don Francisco de Murga Serret, con la dirección del Letrado don Miguel García de Obeso, y habiendo comparecido, como recurrido, la demandante señora Rubio, y en su nombre y representación el Procurador don Juan Corrujo López Villamil, bajo la dirección del Letrado don Angel Segura:

RESULTANDO que mediante escrito presentado el 12 de febrero de 1958 a reparto de los Juzgados de Primera Instancia de Gijón, correspondiendo al número uno, el Procurador don Ramón Díaz Piñeira, en representación del Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, actuando a nombre de la asociada a la misma, doña Gregoria Rubio Vega, formuló contra don Leonardo Muñoz Bastida demanda, que basó, sustancialmente en los siguientes hechos:

Primero. Que el demandado llevaba en arrendamiento una de las piezas de la planta baja de la casa número 12 de la calle de Valencia, de cuya finca era propietaria la demandante, identificándose el local como el número uno con frente a la calle de Calvo Sotelo.

Segundo. Que desde la fecha del arren-

damiento estaba destinado el local, conforme a lo previsto en el contrato, a la venta de vinos al por menor; y

Tercero. Que no obstante la prohibición de subarrendar contenida en el contrato, el demandado tenía cedida la bodega a don Braulio Díez Bañares, quien la explotaba por su cuenta, pagando al arrendatario cedente la renta, contribuciones e impuestos y haciendo suyos los beneficios en compensación a los intereses que habría de cobrar dicho cedente por cantidad que le había dejado en préstamo; así resulta de acto conciliatorio promovido por el demandado señor Muñoz contra don Braulio Díez Bañares, celebrado el 25 de enero; en derecho invocó, entre otros preceptos, la causa segunda del artículo 114 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; terminando por suplicar se dictara sentencia declarando resuelto el referido contrato de arrendamiento, condenando al demandado a desalojar el aludido local con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciera en el término legal e imposición de costas:

RESULTANDO que, admitida la demanda a trámite para la sustanciación de las reglas establecidas para los incidentes, se confirió traslado de la misma, con emplazamiento, al demandado don Leonardo Muñoz Bastida, y compareció en su representación el Procurador don José Ramón Ybaseta Gutiérrez, en 21 de febrero de 1958 presentó escrito de contestación, consignando en lo esencial bajo el capítulo de hechos: que en primer lugar exceptuaba la falta de legitimación pasiva, pues la actora debió de haber demandado conjuntamente con el demandado al que llama subarrendatario, don Braulio Díez Bañares; que es cierto lo que se dice en el hecho primero de la demanda, debiendo aclarar que lo arrendado fué el piso bajo número 1 de la propiedad de la actora, instalando el deman-

dado en el local su propia industria, pues allí, anteriormente, no había ningún negocio; y habiendo entregado a la demandante, como prima, 13.000 pesetas al formalizar el contrato; que es cierto el hecho segundo y desde la fecha del arrendamiento lo seguía destinando el demandado a la venta de vinos al por menor, y que es incierto el hecho tercero; lo único cierto es que el señor Díez facilitó un préstamo de 19.000 pesetas al demandado, y éste, con objeto de garantizar el pago de dicho préstamo, por exigencias del propio señor Díez, le ofreció como garantía el negocio por él instalado en el local objeto de esta litis, pero nunca se trató de traspaso, cesión ni subarriendo, como se deduce de la simple lectura del acta de conciliación que se cita de contrario; por el convenio suscrito entre el demandado y el señor Díez, éste, para mayor garantía del préstamo concedido pasó a ocupar en el negocio un puesto como encargado, pero dependiendo directamente del dueño del negocio, y despachando al público el vino que le facilitase el señor Muñoz, señalando este el precio de venta al público, que no podría ser alterado por el señor Díez; otra prueba de que no existió subarriendo ni traspaso en el referido convenio es que el demandado se comprometió a realizar el traspaso al señor Díez en el momento oportuno, y claro está que para realizarlo hubiera tenido muy en cuenta las prescripciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos a este respecto; acredita también lo expuesto el hecho de que el propio señor Díez, en el acta de conciliación a que se hace referencia de adverso, recibió del señor Muñoz 19.000 pesetas, importe del préstamo que le había concedido, aviniéndose a cesar en el puesto de encargado o inspector en el negocio del demandado, y la contribución industrial y demás impuestos, así como los suministros de aguas y alumbrado del

local de referencia, siempre estuvieron y seguían estando a nombre del señor Muñoz; en derecho alegó lo que estimó pertinente, y terminó por suplicar se dictara sentencia por la que se estimase la excepción de falta de legitimación pasiva que alegaba, y en todo caso desestimar la demanda declarando que no había existido subarriendo, ni cesión ni traspaso, y que, por tanto, no procedía la resolución del arrendamiento de que se trata, absolviendo libremente de dicha demanda al demandado, con expresa imposición de costas a la actora:

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba se practicaron: A) A instancia de la parte actora las de confesión judicial; documental, aportándose a los siguientes documentos, entre otros: a) Testimonio del acta de conciliación, extendida con fecha 25 de enero de 1958, referencia a la celebrada a instancia de don Leonardo Muñoz Bastida con don Braulio Díez Bañares; éste como parte conciliada; aquél manifestó se intentaba al acto para que el último se aviniese con los siguientes extremos:

«Primero. Entre conciliante y conciliado se suscribió el siguiente contrato de garantía consensual: En la villa de Gijón a 31 de diciembre de 1955, reunidos de una parte don Leonardo Muñoz Bastida y de otra don Braulio Díez Bañares... en pleno ejercicio de sus facultades intelectuales y derechos civiles, habiendo convenido en el otorgamiento del presente contrato a tenor de los siguientes pactos: Primero. El don Leonardo Muñoz Bastida es dueño en pleno dominio de la bodega o bar económico, sito en Gijón, calle de Calvo Sotelo, 14, planta baja, negocio que creó en el mes de febrero del año actual mediante pago de 13.000 pesetas a la dueña del inmueble. Segundo. Declara, asimismo, que por carecer de medios económicos recibió del don Braulio Díez Bañares la cantidad de 19.000 pesetas, con las que satisfizo los gastos de apertura del negocio, como permiso de apertura, instalación de servicios, etc., y cuya cantidad percibió sin devengar interés y comprometiéndose a devolverla el primero de diciembre del año actual. Tercero. Que por haber ampliado su negocio al adquirir otro de igual clase, aunque de mayor envergadura, sito en la travesía de Antonio Cacho, número 8, bajo, se ve imposibilitado de hacer la devolución en metálico acordada al don Braulio Díez Bañares. Cuarto. Por haber sido vencido el plazo de devolución y con objeto de garantizar el crédito a don Braulio, el don Leonardo le hace entrega por este acto de la bodega, sita en la calle de Calvo Sotelo, 14, de la que se hace cargo en concepto de garantía del capital prestado y como pago de intereses el beneficio que por venta pueda obtener, en la forma que después se dirá. Quinto. No obstante, el don Leonardo se compromete por este acto a realizar el traspaso del local en su estado actual al don Braulio Díez Bañares tan pronto como para ello fuese requerido, libre toda carga o gravamen, pero siendo de cuenta del requirente los gastos que se pudieran ocasionar. Sexto. El don Braulio Díez Bañares satisfará al cedente la renta devengada por el local y los impuestos de Hacienda municipales y provinciales a partir del día primero de año como bodegón. Séptimo. Igualmente convienen en que dicha bodega no podrá vender otra clase de vino que las que le facilite el don Leonardo Muñoz Bastida, que serán puros al precio de cuatro pesetas litro, tanto el tinto como el clarete, precio que será aumentado o disminuido a tenor y en la cuantía de las altas y bajas del mercado vinícola, garantizándose con ello el beneficio de venta en favor del cesionario. Octavo. La realización del traspaso, en su caso, será siempre en favor de don Braulio Díez

Bañares y que de no ser así y anunciada en solitud será preferido su propietario en igualdad de condiciones. Noveno. Si por causas no imputables al don Braulio Díez Bañares se viese desposeído de la garantía dada (bodega), el don Leonardo Muñoz Bastida satisfará la cantidad de 19.000 pesetas, respondiendo para ello la totalidad de sus bienes presentes y futuros...»

«Segundo. El conciliante ofrece en este acto la cantidad de 19.000 pesetas, importe de la deuda, a fin de que el conciliado deje libre la bodega (garantía de dicha deuda principal) en el plazo de un mes, siendo lanzado a su costa de no hacerlo así; el conciliado manifestó que estaba conforme con recibir en este acto las 19.000 pesetas, comprometiéndose a desalojar la bodega en el término de un mes, reservándose las acciones que pudieran corresponderle para reclamar en su día los daños y perjuicios que se le habían ocasionado; el conciliante hizo entrega al conciliado de las 19.000 pesetas, que éste recogió; finalmente, se dió el acto por terminado con avenencia; y B) Don Braulio Díez Bañares, accediendo al requerimiento que se le hizo presentó un documento de fecha 24 de febrero de 1958—folio 31— suscrito por don Leonardo Muñoz—y que éste reconoció al absolver peticiones— declarando haber recibido de mano de don Braulio Díez Bañares, la llave de puerta de la bodega y la totalidad de utensilios que en su día le entregó; todo ello en perfecto estado de conservación, por lo que renunció a toda clase de reclamación que pudiera formular, acto de entrega, consecuente con acto de conciliación celebrado en el Juzgado número 2 de esta villa, en el que hizo entrega de la cantidad en metálico convenida para el desalojo del local; y la testifical; y B) Por la parte demandada las de confesión judicial, documental contenida por los siguientes documentos: a) Recibo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Comarca de Gijón, de renta del local objeto de esta litis, correspondiente al mes de febrero de 1958 y extendido en nombre de don Leonardo Muñoz; b) Otro de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, fecha primero de febrero de 1958, a favor de don Leonardo Muñoz Bastida, Calvo Sotelo, 14, por el dos por ciento de su contribución correspondiente a dicho año; c) otro de la contribución industrial girado también a nombre del señor Muñoz y mismo domicilio que el anterior, por el primer trimestre de 1958 y «restaurante económico»; d) certificación expedida por dos apoderados del Banco Pastor, sucursal de Gijón, haciendo constar que ininterrumpidamente, desde el mes de noviembre de 1955 hasta la fecha, 25 de marzo de 1958, esa sucursal había venido atendiendo los recibos extendidos por la Compañía Telefónica Nacional de España, relativos al abono de determinado teléfono instalado en la calle Calvo Sotelo, número 14, bodega de vinos, a nombre de don Leonardo Muñoz Bastida, con cargo a la cuenta de dicho usuario; e) otra librada por el Secretario del Ayuntamiento de Gijón y acreditativa de que don Leonardo Muñoz Bastida venía tributando a ese Ayuntamiento por introducción de vinos, no figurando que don Braulio Díez Bañares hubiese satisfecho nunca por dicho impuesto; y f) dos suscritas por el Jefe del Negociado de Industria en la Subdelegación de Hacienda de Gijón, expresivas: la primera, de que don Leonardo Muñoz Bastida causó alta en la contribución industrial por el concepto de bodegón el 11 de abril de 1955, en la avenida de Calvo Sotelo, número 14, hasta el primero de junio de 1956, en que pasó a contribuir en el mismo domicilio con restaurante económico, continuando en esta fecha—24 de marzo de 1958—matriculado en este último concepto; y

la segunda, de que don Braulio Díez Bañares no figuraba matriculado en la contribución industrial por el concepto de bodega de vinos; y la testifical:

RESULTANDO que unidas a los autos las pruebas practicadas y celebrada vista pública a petición de la parte demandada, el Juez de Primera Instancia del número uno de Gijón, con fecha 2 de mayo de 1958, dictó sentencia por la que estimando la demanda formulada por doña Gregoria Rubio Vega, declaró no haber lugar a la excepción de falta de personalidad en el demandado por infracción del principio que rige el litis-consorcio necesario, y haber lugar a la acción resolutoria en relación con el contrato de arrendamiento del bajo o local de negocio de la casa número 12 de la calle Palencia, de dicha villa; que se identifica el local como el número 1 con frente a la calle Calvo Sotelo, y, en su consecuencia, condenó al demandado don Leonardo Muñoz Bastida a que desalojase y dejase a la libre disposición de la actora el referido local, dentro del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento e imponiéndole las costas causadas en este litigio:

RESULTANDO que apelada dicha sentencia por la representación del demandado y sustanciada la alzada por sus trámites legales, la Sala de Vacaciones de la Audiencia Territorial de Oviedo, con fecha 4 de agosto de 1958, dictó sentencia confirmando la del Juzgado, sin hacer expresa imposición de costas:

RESULTANDO que constituyendo depósito de 1.000 pesetas, el Procurador don Francisco de Murga Serret, a nombre de don Leonardo Muñoz Bastida, ha interpuesto ante esta Sala, contra la sentencia de la Audiencia, recurso por injusticia notoria, estableciendo los siguientes motivos:

Primero. Fundamentado en la causa tercera del artículo 136 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; infracción, por aplicación indebida, consiguiente e interpretación errónea del artículo 22 y de la causa segunda del artículo 114 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, en relación con la violación por falta de aplicación e interpretación errónea de los artículos 1.281, 1.282, 1.283, 1.285 y 1.542 del Código Civil; doce, número primero; diecinueve, veinte, y regla tercera, párrafo segundo, del artículo 84 de la Ley de 18 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria; y seguidamente se expone: que las sentencias de instancia parten, como no podía menos, puesto que ello constituye el fundamento de la demanda, de la situación de hecho reflejada en el llamado «contrato de garantía consensual», celebrado en 31 de diciembre de 1955 entre el recurrente, como prestatario garantizante, y don Braulio Díez Bañares, como prestamista garantizado con el establecimiento de bodega o bar económico del primero, instalado en el local objeto del contrato de arrendamiento cuya resolución se pide; dichas sentencias admiten y reconocen que tal contrato es un verdadero contrato de garantía o «de fiducia», celebrado al amparo de la libertad que concede el artículo 1.255 del Código Civil, como se dice en uno de los considerandos de la sentencia del Juzgado, pero estiman y sostienen que como hay una relación sublocativa, quizá temporal o condicional, por la que el arrendatario transfirió el goce material del objeto arrendado al «subarrendatario»—así le llama la sentencia—mediante una cantidad rentista mensual, ello es suficiente para la aplicación de la causa segunda del artículo 114 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con todas sus consecuencias legales; pero con ello se han infringido o violado los preceptos señalados; a) porque las sentencias de instancia admiten y reconocen la existencia como contratos independientes del «subarriendo» por un lado, y el de garantía por otro; b) porque

posición a la tesis del recurrente, cabe alegar:

a) Las sentencias de instancia no estiman la existencia de dos contratos independientes de garantía por un lado y de subarriendo por otro, sino que, refiriéndose a tal denominado contrato de garantía, estiman que se ha introducido en el local arrendado una tercera persona que lo ha estado disfrutando sin la necesaria autorización del arrendador para legitimar tal uso.

b) La intención de las partes al estipular dicha garantía fué, no también, sino primordialmente, la de ceder el uso del local, al menos temporalmente, al señor Díez, y la mejor prueba de ello es que en cumplimiento del convenio referido se introdujo en el local arrendado esa tercera persona, extraña a la relación arrendaticia, lo que por sí solo constituye causa resolutoria del arrendamiento, como reiteradamente viene sosteniendo esta Sala.

c) El fundamento de la demanda no fué otro que el de la existencia del subarriendo, del que una de las varias probanzas que la actora propuso y lo acreditó fué el acto conciliatorio a que se refiere el recurrente.

d) En los subarriendos incoherentes, fraudulentamente concertados, no puede jugar como requisito para su estimación el de existencia de una subrenta de mayor cuantía o importe que la merced del arrendamiento, porque como tiene repetido hasta la saciedad esta Sala, lo que la Ley prohíbe, llámese subarriendo, cesión o traspaso, es la introducción en el local arrendado de tercera persona ajena al vínculo arrendaticio, que lo usa y disfruta a espaldas del arrendador, sin entrar a discriminar si media precio o si es incluso gratuita; es el acto dispositivo ilegal lo que se sanciona.

e) Suficientemente explícita ha sido la prueba para desvirtuar la alegación contraria de exclusividad de compra impuesta en la adquisición de las bebidas a expender donde podría estar el sobreprecio de la subasta, pues de una parte el propio recurrente confesó (posición tercera) ser cierto que el señor Díez nunca le dió cuentas de la explotación del negocio cuyos beneficios o quebrantos correspondían íntegramente a dicho señor Díez, y de otra parte, en la declaración testifical de este último, reconoció que el resto de mercancías que se expedían en el local, las compraba a otras personas y casas, aparte del reconocimiento fundamental de estar en el local en concepto de dueño y de haber pagado al recurrente 19.000 pesetas por el subarriendo; que son igualmente desestimables el resto de las alegaciones que se hacen en el motivo, pues ni el pretendido contrato de garantía tiene jurídicamente la conceptualización de hipoteca de establecimiento mercantil, ni hay inscripción del mismo en el correspondiente Registro, ni lógicamente se ha podido iniciar procedimiento judicial para que al presunto acreedor hipotecario se le confiera la posesión interina del establecimiento; y que, por último, tampoco cabe hablar en este caso presente de que los señores Muñoz y Díez tuvieran otra intención ajena a la del subarriendo, pues independientemente del paladino reconocimiento que hace este último de que lo pactado fué precisamente esta figura jurídica, encubriéndola con la apariencia del contrato de garantía del examen de éste se infiere que sólo pretendieron encubrir un verdadero subarriendo para el que no se contaba con la imprescindible autorización de la propiedad.

Al motivo segundo: Que omite el recurrente la indicación del concepto en que estima cometidas las infracciones que cita, y ello es causa de desestimación; incumple el artículo 136 último párrafo de la Ley de Arrendamientos Urbanos; que el artículo 25 de dicha Ley no se refiere a local de negocio, sino a vivienda, y por esta simple razón no ha podido ser infringido, y que en cuanto a la aplicación ana-

lógica del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por virtud de lo dispuesto en el octavo de la de Arrendamientos Urbanos, es asimismo improcedente, por cuanto reiteradamente tiene establecido esta Sala, en infinidad de sentencias, que la exigencia de demandar también al cesionario sólo reza para los casos de viviendas, pero no para los del local de negocio, y es abundante también la doctrina jurisprudencial relativa a que en el ejercicio de acciones resolutorias por subarriendo incoherente sea de viviendas o de locales de negocio, no es preciso demandar al subarrendatario, extraño al nexo arrendaticio, si bien debe ser tenido por parte en el litigio si se persona en autos.

Al motivo tercero: Que no existe tal supuesto error de apreciación, ni mucho menos puede hablarse de que si el mismo puede ser manifiesto o evidente, es decir, que alguno de los documentos citados de contrario hubiera sido desconocido por el juzgador de instancia o su contenido fuera abiertamente contrario a la estimación de hechos realizada por aquí (según doctrina jurisprudencial reiterada), pues nada de ello ocurre en el caso de autos, en que tanto el Juzgado como la Sala recurrida han apreciado la prueba en su conjunto, considerando también los documentos que invoca el recurrente, y del análisis de todo llega a la conclusión de la existencia del subarriendo; que haciendo referencia, ya en particular, a los documentos que se indican en el motivo, procede impugnar asimismo la pretensión contraria, pues a) la certificación del acto conciliatorio, acredita la celebración del mismo y las manifestaciones hechas en dicho acto, pero no alcanza a constituir prueba de la preexistencia del pretendido contrato, aparte de que aun admitiendo su certeza se llega a la conclusión contraria a la pretendida por el recurrente, pues el mismo viene a corroborar la transmisión (al menos temporal) del uso del local arrendado al señor Díez, tercero y extraño al contrato de arrendamiento; este documento ha sido, pues, correctamente interpretado; y b), c) y d), los recibos de arrendamiento, Cámara de Comercio, contribución industrial, abono del teléfono y las certificaciones del Secretario del Ayuntamiento y Subdelegación de Hacienda, en nada contradicen la apreciación probatoria de, juzgador, por cuanto es racional que mientras la propiedad (en este caso la entidad administradora) ignora el antijurídico subarriendo, continúa expediendo normalmente los recibos de renta a nombre del arrendatario, e igualmente es normal que no se varíe la titularidad del negocio a efectos fiscales ni externos, dado el natural interés de las partes en ocultar y silenciar la intromisión de un extraño, situación de hecho contemplada en infinidad de casos por esta Sala y que ha motivado su abundante doctrina jurisprudencial sobre el particular, rechazando motivos de recurso basados en la causa cuarta del artículo 173 (hoy 136) de la Ley de Arrendamientos Urbanos en los que se hacían alegaciones idénticas a las que aquí se están impugnando; pero, a mayor abundamiento, aunque hipotéticamente los documentos referidos acreditaran lo que intenta el recurrente, no sería procedente descomponer el resultado de la prueba y oponer parte de los elementos de la misma al resultado que ofrece su conjunto, pues tal postura procesal ha sido insistentemente rechazada por la jurisprudencia; y que olvida ahora el arrendatario sus propios reconocimientos al prestar confesión judicial, tanto contestando la posición tercera como al reconocer la autenticidad del documento que aparece en el folio 31, que prueba palmariamente el uso del local por el señor Díez, y también olvida que consta asimismo en autos la declaración testifical de este último, en la que el reconocimiento del subarriendo no puede ser más explícito.

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Francisco Arias y Rodríguez Barca;

CONSIDERANDO que fundado en la causa cuarta del artículo 136 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos se articula el motivo tercero del recurso por estimar que las sentencias de instancia han incidido en manifiesto error de hecho en la apreciación de la prueba, consistente en afirmar la existencia de un subarriendo del local por el arrendatario don Leonardo Muñoz Bastida a favor del señor Díez Bañares, contra lo que dicen los documentos que cita, expresivos de que no ha existido tal cesión del disfrute, sino sólo una fiducia como garantía de un capital prestado, como lo acredita la certificación del acto de conciliación obrante a los folios 18 vuelto al 20 de los autos, en la que se transcribe el documento llamado de «garantía consensual» de 31 de diciembre de 1955, consistente en un contrato de garantía por el cual el arrendatario entrega la bodega objeto del contrato de arrendamiento al prestamista a don Braulio Díez Bañares para su explotación, y en el concepto de garantía del capital prestado hasta la total entrega de éste, y cobro con los beneficios del negocio de los intereses del capital; con los recibos de las Cámaras de la Propiedad Urbana y de la de Comercio, Industria y Navegación de la contribución industrial obrante a los folios 45 al 47 y acreditativos del pago de contribuciones a nombre del arrendatario señor Muñoz Bastida referente al local de que se trata y durante el tiempo que subsistía la posesión del mismo a nombre del acreedor don Braulio Díez Bañares, el pago del teléfono durante igual tiempo y a nombre del mismo arrendatario y las certificaciones del Ayuntamiento de Gijón y de la Subdelegación de Hacienda de la misma población que obran a los folios 59 y 60, expresivas de que el que figuró como contribuyentes en el local arrendado y por el concepto de «bodega», primero, y de «restaurante económico», después, desde el año 1955 al en que se expiden, fue don Leonardo Muñoz Bastida; todos cuyos documentos no son expresivos de que haya existido contrato alguno de subarriendo, puesto que para nada surge la existencia de persona tercera que ostenta el carácter de subarrendatario y que es preciso para la configuración del subarriendo, pues la mención del tercero ya se dice que lo es con el carácter de acreedor y su posesión es en nombre del deudor a diferencia del subarrendatario que exige que se posea en nombre propio, luego es indudable que se ha cometido en la apreciación de la prueba documental un manifiesto error que obliga a subsanarlo admitiendo el recurso por tal causa;

CONSIDERANDO que admitido el recurso por el motivo anterior, huelga el tratar de los restantes, por innecesario, y en su virtud, procede dejar sin efecto la sentencia de instancia, con revocación de la primera instancia por contener idénticos fallos, debiendo dictar otra sentencia de fondo, en el sentido de desestimar la demanda, por no estar probada la existencia del subarriendo discutido y sin el cual no es de estimar la causa segunda del artículo 114 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, vigente que servía de fundamento a aquélla, por lo que es visto que debe absolverse al demandado de la demanda formulada en su contra, con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la demanda, sin que deba hacerse especial mención de las de la segunda instancia ni de las del presente recurso;

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de injusticia notoria formulado por la representación de don Leonardo Muñoz Bastida contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Oviedo en 4 de agosto de 1958, la que dejamos sin efecto así como la del Juzgado de Primera Instancia de Gijón de fecha 2 de mayo de 1958, que expresamente revocamos, y en

su virtud debemos absolver y absolvemos a don Leonardo Muñoz Bastida de la demanda en su contra deducida por la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana en nombre y representación de doña Gregoria Rubio Vega, a la que condenamos a las costas de la primera instancia sin hacer expresa condena de las de segunda instancia, ni de las del presente recurso; devuélvase a dicha parte recurrente el depósito constituido; y librese a la citada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Ruiz Gómez.—Francisco Arias.—Eduardo Ruiz.—Bernabé A. Pérez Jiménez.—Baltasar Rull. (Rubricados.)

Publicación.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Francisco Arias y Rodríguez Barba, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.

Madrid, cinco de diciembre de mil novecientos sesenta.—Rafael G. Respada. (Rubricado.)

MAGISTRATURAS DE TRABAJO

MURCIA

Don Eugenio López de Sa y Murcia, Magistrado de Trabajo de esta capital y su provincia.

Hago saber: Que en los procedimientos que en esta Magistratura de Trabajo se siguen con los números 504, 505 y 506 de 1960; sobre reclamación por despido, a instancia de los productores Manuel Aliaga Muñoz, Martín Martínez Bafión y Luis Melero Palao, acumulados, contra los empresarios don Antonio Moreno Espinosa y don Manuel Moreno Fernández, en la actualidad en periodo de ejecución de sentencia, he acordado, en providencia de esta misma fecha, sacar a su venta en pública subasta los bienes inmuebles que después de expresaran, por un descubierto de veintiséis mil ciento noventa y ocho pesetas con cuarenta y cuatro céntimos de principal y diez mil pesetas más presupuestadas para costas y gastos.

Las fincas objeto de subasta son:

1.º En término de Yeste, en el paraje Pindaval, provincia de Albacete, un trozo de tierra, de cabida una hectárea cuarenta áreas once centiáreas, a monte bajo pinos sueltos, única. Linda: Norte, camino de Cueva Higuera; Levante José Martínez; Sur, ríos Segura, y Poniente, José Ramón Tamayo; valorada en seis mil pesetas.

2.º En mismo término y en el paraje denominado «Loma Atochar», un trozo de tierra de cabida una hectárea noventa y dos áreas y sesenta y seis centiáreas, a monte bajo pinos sueltos. Lindando Norte, con don Agapito Sánchez; Levante, camino de Jartos a la Vicaría; Sur, Sebastián Moreno Valero, y Poniente, Pedro Martínez; valorada en ocho mil pesetas.

3.º En mismo término e igual paraje, sitio conocido por Umbria del Fraile, un trozo de tierra de cabida una hectárea cinco áreas y once centiáreas, a monte bajo, clase única. Lindando Norte, Sebastián Martínez; Levante, Manuel Martínez; Sur, Saturnino Fernández, y Poniente, Gil Alarcón; valorada en cinco mil pesetas.

4.º En mismo término, paraje Tindaval, un trozo de tierra de cabida diecisiete áreas cincuenta y una centiáreas, a viña, filloserada única. Linda: Norte, An-

tonio Alfaro; Levante, Pedro Martínez; Sur, pantano de la Fuensanta, y Poniente, camino del cementerio; valorada en mil pesetas.

5.º En igual término, paraje de La Loma, un trozo de tierra riego, con nueve olivos, de cabida ocho áreas setenta y seis centiáreas. Linda: Mediodía y Saliente, Manuel Moreno; Poniente, Esteban García, y Norte, acequia de La Loma; valorada en seis mil pesetas.

6.º En mismo término, paraje La Loma, un trozo de tierra de cabida una área cuarenta y seis centiáreas, a secano olivar. Linda: Norte, Manuel Moreno; Levante, Florentino García; Sur, Isabelo García Toledo, y Poniente, Pedro José García López; valorada en quinientas pesetas.

7.º En igual término, paraje Humbría de los Marines, un trozo de tierra riego, con una oliva, de cabida dos áreas noventa y dos centiáreas. Linda: Norte, acequia de los Luisés, y por los demás lados, Julián Alarcón; valorada en mil pesetas.

Ascendiendo el importe de esta subasta a la cantidad de veintisiete mil quinientas pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes de su avalúo.

Los licitadores, para poder tomar parte en la subasta, habrán de depositar en la Mesa de esta Magistratura una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento del tipo de tasación.

Dicha subasta tendrá lugar a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o en el siguiente, si aquél fuere festivo, siendo las demás condiciones las establecidas por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Murcia a trece de abril de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez de Primera Instancia, Eugenio López de Sa y Murcia.—El Secretario, Enrique Clariana.—1.794.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de Primera Instancia del Juzgado número dieciséis de los de esta ciudad de Barcelona, en providencia de fecha once del actual mes de abril, dictada en los autos de procedimiento sumario del artículo 131. de la Ley Hipotecaria, promovidos por la entidad «Compañía de Construcciones Ibiza, S. A.», contra don Guillermo Tuells Riquer, se sacan a pública subasta por primera vez, término de veinte días y precio de su valoración, las dos fincas siguientes:

Edificio destinado a hotel con entrada principal por la calle Eugenio Molina, de la ciudad de Ibiza, número catorce, con una salida accesoria a la calle de la Cruz, número veinticuatro, de unos ciento treinta y ocho metros cuadrados de superficie, compuesto de planta baja, cuatro pisos altos y un ático Linda, entrando, derecha, casa de los herederos de doña Carmen Huells y Riquer; izquierda, las de don Alfonso, Pineda y herederos de don Manuel Pineda, don Vicente Planells, don Antonio Cardona, don José Tur, don Juan Serra y don Vicente Cardona, y fondo, calle de la Cruz. Inscrita en el tomo 53 de la ciudad, folio 134, finca número 2960, inscripción primera; sirviendo de tipo para la subasta de la transcrita finca el pactado en la escritura de préstamo, o sea por la cantidad de un millón trescientas seis mil pesetas.

Casa de planta baja y tres pisos de la casa que da a la plaza de José Verdera, antes San Telmo, cuyo portal, que da subida a los pisos, tiene el número diecisiete y la planta baja, sin numerar; tiene una superficie de ocho metros de fachada por cuatro de fondo y sus linderos son: entrando por dicha plaza de

José Verdera, con la calle del Obispo Cardona; izquierda, con la calle Juan Torres Guasch; espalda, con el resto de dicha finca de doña María Tuells. Inscrita en el tomo 42 de Ibiza, folio 210, finca número mil novecientos cincuenta y nueve, inscripción primera; sirviendo de tipo para la subasta de la transcrita finca el pactado en la escritura de préstamo, o sea por la cantidad de ciento cuarenta y nueve mil pesetas.

Se hace constar que los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

El remate tendrá lugar en este Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de los de esta ciudad de Barcelona, sito en el Palacio de Justicia, el día veintiséis de mayo próximo y hora de las doce; previniéndose a los licitadores que para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en la Mesa del Juzgado o en la Caja General de Depósitos una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, siendo el tipo de subasta para la primera finca la suma de un millón trescientas seis mil pesetas, y para la segunda, la cantidad de ciento cuarenta y nueve mil pesetas, y no se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo; las consignaciones serán devueltas a sus respectivos dueños acto continuo del remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta; que el acreedor podrá concurrir como postor a la subasta y no necesitará consignar cantidad alguna para tomar parte en la licitación, y que los gastos de subasta y demás que con la venta se originen vendrán a cargo del comprador.

Dado en Barcelona a doce de abril de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez de Primera Instancia (legible).—El Secretario (legible).—2.777.

IGUALADA

Don Antonio García Espinosa, Juez de Primera Instancia de la ciudad y partido de Igualada.

Por el presente se hace saber: Que en el procedimiento de hipoteca mobiliaria que con el número 4 de 1961 se tramita en este Juzgado a instancia de don José Masdeu Cabré, representado por el Procurador don Venancio Dalmau Jover, contra don Domingo Parera Canals, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Esparraguera, San Miguel, 2, se ha acordado sacar a pública subasta por segunda vez, término de diez días y sin sujeción a tipo los siguientes bienes:

Cinco taladros «Casals» 29 U 6; un taladro «Casals» 40 U 10; un taladro columna «Comain», 22 mm.; una tijera circular «Agial», figura 270, número 3; una cizalla eléctrica «Lestos», 220 voltios; una sierra mecánica doce pulgadas «Lluro»; cinco tornillos banco «Arno», 120 milímetros, fijo acero; un tornillo banco «Arno», 100 mm.; cuatro tornillos banco «Sain», 100 mm., boca acero; un tornillo cilíndrico «Nodo», de un metro e. p., con motor «Geal» 3/4 HP.; un torno «Nodo» cilíndrico un metro con caja de velocidades «Eva» y motor de un HP.; dos tornos «Aleu» de semirrevolvers; dos tornos «Abella» monopolea, de un metro y 1,20 metros, con sus respectivos motores de un HP. cada uno; una pulidora «Ca-

sals» eléctrica, portátil, modelo 40 I. P.; una gilotina «Gerkam, de un metro útil, con motor de 2 HP.; una máquina soldar por puntos «Sunarka, tipo C6/30, para 4 mm, 6 Kv, movida a mano y refrigeración: agua; un temporizador eléctrico; un cilindro de enrollar chapa y un metro con pie; un cilindro de enrollar 1.000 por 40; todas las expresadas máquinas fueron adquiridas por el hipotecante en septiembre de 1955.

Una taladradora «Delfos» 13 mm, mesa redonda; un motor rectificador con eje flexible de 1/4 HP.; una máquina de escribir «Lexicon 80»; una muela esmeril; una muela esmeril accionada por motor de 1/2 HP.; dos plegadoras un metro para chapa de un milímetro; dos juegos troqueles para construcción de placas; una bordadora; tres troqueles repulados «Zeus» e «Iberia»; una pulidora equipada con motor de 2 HP.; un compresor 300 litros de dos cilindros con motor de 2 HP.; un horno eléctrico para la pintura con su instalación; rails para los chapistas; instalación soldadura autógena con tubo plomo dos campanas y 10 sopletes con las correspondientes boquillas; cinco soldadores para estaño; tres coquillas función aluminio; una coquilla fundición turbina «Iberia»; tres coquillas marcos y tapas «Girasol»; un crisol y horno utilajes fundición aluminio; una pulidora portátil modelo «Casals» y un cilindro especial. Estas máquinas fueron adquiridas por el hipotecante en enero de 1957.

El precio fijado en la escritura de hipoteca es el de trescientas veinticinco mil pesetas, tres anualidades de intereses al cuatro por ciento anual y setenta mil pesetas presupuestas para costas, gastos y perjuicios.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el próximo día doce de mayo venidero, a las doce horas.

Condiciones:

- 1.ª La subasta se celebrará sin sujeción a tipo, conforme queda dicho.
- 2.ª Deberán los licitadores consignar previamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al efecto el quince por ciento del precio fijado en la escritura de hipoteca para tomar parte en la subasta.
- 3.ª Que los autos y la certificación del Registro están de manifiesto en Secretaría para poder ser examinados.
- 4.ª Que los expresados bienes se hallan sitos en Esparraguera, calle Huertas, 11, y paseo de Francisco Marimón, sin número.

Dado en Igualada a 12 de abril de 1961. El Juez, Antonio García Espinosa. — El Secretario, José Barrionuevo Martínez.—2.798.

LOGROÑO

Don Francisco López Quintana, Magistrado, Juez de Primera Instancia de la ciudad y partido de Logroño.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento judicial sumario instado por don Luis Sáez-Badillos Alba, mayor de edad, contra don José María Arriaga García, en el cual he acordado la celebración de primera subasta de las fincas siguientes:

Piso entresuelo o entre-piso, que ocupa la misma área que el local de la planta baja, o sea el lindo Este de la casa que después se dirá, con siete metros 80 centímetros de anchura en su límite Norte y 13,70 metros en su límite Sur, y una profundidad de 13,20 metros, siendo su figura una ecuadrada; el piso entresuelo, con vistas a la calle Marqués de Vallejo, y el piso primero mano derecha de la casa número 4 de la calle Marqués de Vallejo y 82 y 70 de la del General Mola, con todas las habitaciones y dependen-

cias que los integran, con dos carboneras anejas a estos dos últimos.

La subasta se celebrará en este Juzgado el día veintiséis de mayo próximo y hora de las once de la mañana, por el tipo global de ciento cincuenta mil pesetas, no admitiéndose postura alguna que sea inferior al mismo.

Los autos y la certificación del Registro están de manifiesto en Secretaría. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Logroño, cuatro de abril de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez de Primera Instancia, Francisco López Quintana.—El Secretario (legible).—2.799.

MADRID

En los autos de mayor cuantía seguidos en este Juzgado número 20 de Madrid a instancia de «Warnes Bros Films National Films, S. A. E.», representada por el Procurador señor Monteseirin, contra «Estudios Ballesteros, S. A.», y don Francisco Fernández Rojas, como propietario de «Planeta Films», sobre tercería de dominio, se dictó providencia, que en su parte necesaria es del tenor literal siguiente:

«Providencia.—Juez señor García Monge.—Madrid, veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y uno. Dada cuenta: Por presentado el anterior escrito con los documentos que le acompañan, fórmese con ellos la oportuna pieza separada por dependencia de los autos ejecutivos, seguidos en este Juzgado con el número 280 de 1960, a instancia de «Estudios Ballesteros, S. A.», contra don Francisco Fernández de Rojas, propietario de la productora cinematográfica «Planeta Films».

Se tiene por parte legítima al Procurador don Francisco Monteseirin López, en nombre y representación de «Warnes Bros Films National Films, S. A. E.», entendiéndose con el mismo las sucesivas diligencias.

Se admite a curso la demanda de tercería de dominio que se entabla, la que se sustanciará por los trámites del juicio declarativo de mayor cuantía, confiriéndose traslado de la misma, con entrega de las copias simples presentadas a «Estudios Ballesteros, S. A.», y a don Francisco Fernández de Rojas, como propietario de «Planeta Films», para que dentro del término de veinte días comparezcan y la contesten, bajo apercibimientos legales...

Lo mandó y firma su señoría: doy fe.—García-Monge.—Ante mí, José Cabello.» (Rubricados.)

Y por providencia de esta fecha, dictada en referidos autos, y por ignorarse el domicilio de don Francisco Fernández de Rojas, se ha acordado emplazarle a los fines y términos acordados por medio de edictos, haciéndose constar que las copias simples de la demanda y documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de emplazamiento a don Francisco Fernández de Rojas, a los fines y términos acordados, y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expido la presente, que firmo en Madrid a 12 de abril de 1961.—El Secretario, José Cabello.—2.898.

MURCIA

Don Juan de la Cruz Belmonte Cervantes, Magistrado, Juez de Primera Instancia número uno de los de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don Antonio Sánchez Nicola, en nombre y representación de doña Patrocinio Gómez Gómez, contra la finca especialmente hipotecada a su favor por don Antonio Martínez Andique, mayor de edad, casado con doña María Hernández Baeza, empleado y vecino de Murcia, con domicilio en Torre de Romo, 26, en garantía de un crédito hipotecario de 55.000 pesetas

del principal y 20.000 más para gastos y costas, y cuya finca es la siguiente:

Una casa de dos cuerpos y un piso con cubierta de terrado, situada en el barrio de San Benito, de esta ciudad, pago de la Condomina y calle denominada Torre de Romo, señalada con el número 30; hoy ocupa una superficie de ochenta y ocho metros ochenta y un centímetros; y linda por la derecha, entrando, don José y don Juan Illán; por la izquierda, don Diego Denia; por el fondo, don Jerónimo Egidio, y al frente, calle de su situación.

Dicha finca se halla inscrita a favor del demandado en el Registro de la Propiedad II de Murcia, en libro primero de la Sección segunda, al folio 195, finca 53, inscripción primera, y por lo que afecta a la hipoteca, a los mismos tomo y número de finca, folio 195 vuelto, inscripción segunda.

Según la escritura de constitución de hipoteca, el valor de la finca hipotecada para que sirva de tipo en la primera subasta que habría de celebrarse es la cantidad de ciento diez mil pesetas.

Por providencia de esta fecha se ha acordado sacar en pública primera subasta y precio de tasación los bienes hipotecados, habiéndose señalado para que tenga lugar el día treinta de mayo próximo y hora de las once de la mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, y que se anuncia su celebración por medio de edictos que se fijarán en el sitio público de costumbre de este Juzgado, en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», haciéndose constar que para poder tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del precio de tasación; sin cuyo requisito no serán admitidos; que los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate; que servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura de constitución de hipoteca, y que no se admitirá postura alguna inferior a dicho tipo.

Dado en Murcia a trece de abril de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez de Primera Instancia, Juan de la Cruz Belmonte Cervantes.—El Secretario (legible).—2.787.

MURIAS

Se hace saber que en este Juzgado de Primera Instancia de Murias de Paredes se instruye expediente de declaración del fallecimiento de don José Álvarez Rodríguez, natural de Caldas de Luna, que se ausentó hacia Argentina en 1908, residiendo en Arrecifes, no volviéndose a tener noticias desde hace cuarenta años.

Murias, 8 de abril de 1961.—El Juez, Adolfo Fernández Oubiña.—El Secretario, José L. Vázquez Sotelo.—2.725.

1.ª 22-4-1960

JUZGADOS COMARCALES

ARCHIDONA

Don Eufasio Garvín Martínez, Juez comarcal y encargado del Registro Civil de Archidona (Málaga).

Hago saber: Que en este Juzgado y Registro de mi cargo, con el número 138 de 1961, a instancia de doña Elvira Ve-

gas Vegas, de cuarenta y cinco años de edad, soltera, sin profesión, especial, domiciliada en Villanueva del Trabuco, de esta jurisdicción comarcal, se sigue expediente gubernativo para la inscripción fuera de plazo del nacimiento de Juan Vegas y Vegas, nacido en Villanueva del Trabuco, a las dos horas del día veintisiete de octubre de mil novecientos treinta y seis, como hijo natural de la solicitante y de don Juan Vegas y Pérez, hoy fallecido, y que pretende acreditar por la posesión constante del estado de hijo natural, justificada por actos directos de la familia, y ello conforme determina el párrafo segundo del artículo 49 de la Ley del Registro Civil; a cuya solicitante e interesado se les han concedido en referido expediente los beneficios de pobreza que conceden los artículos 101 de la Ley y 372 de su Reglamento.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al interesado hermano de un solo vínculo del que se dice padre del no inscrito don Juan Vegas Díaz, vecino que fué de Villanueva del Rosario, hoy en ignorado paradero, conforme precepta el artículo 349 del citado Reglamento, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en Archidona a quince de abril de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez comarcal, Eufrasio Garvin Martínez.—El Secretario (llegible).—1.793.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en las demás responsabilidades legales de no presentarse los procesados que a continuación se expresan en el plazo que se les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado o Tribunal que se señala se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las autoridades y Agentes de la Policía Judicial procedan a la busca, captura y conducción de aquellos, poniéndolos a disposición de dicho Juez o Tribunal, con arreglo a los artículos correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados Civiles

CARDOSO ALONSO, Trinidad; procesada por daños en juicio de faltas número 677 de 1960; comparecerá en término de cinco días ante el Juzgado Municipal número 6 de Madrid.—1.528.

BUENO, FERNANDEZ, Basilio; soltero, de veintitrés años, representante, natural y vecino de Madrid, hijo de Manuel y de Josefa; procesado por apropiación indebida en sumario 342 de 1960; comparecerá en término de diez días ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid.—1.528.

SANCHEZ CARRION, Antonio; hijo de Pascual y de Pura, de treinta y seis años,

soltero, mecánico, natural de Dos Aguas (Valencia), vecino de Manresa, calle Mayor, 104; procesado en sumario núm. 206 de 1951; comparecerá en término de diez días ante el Juzgado de Instrucción de Manresa.—1.523.

FELICE BINI, Raffaello; de cuarenta y ocho años, casado, del comercio, hijo de Guido y de Emma, natural de Florencia (Italia) y vecino de Asmara (Etiopía), vía Tazas, 20; procesado por lesiones en sumario 480 de 1960; comparecerá en término de diez días ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona.—1.519.

MANUEL GUERRERO, Miguel; natural de Málaga, casado, panadero, de treinta y dos años, hijo de Antonio y de Bárbara, vecino de Barcelona; procesado por delito contra la salud pública en causa número 451 de 1960; comparecerá en término de seis días ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona.—1.518.

SANTALLA SIXTO, Benedicto; de sesenta y cuatro años, hijo de Ramón y de Matilde, natural de Cedeira (La Coruña), casado, vecino de Bilbao, calle Maravillas, 4; procesado en expediente núm. 428 de 1947; comparecerá en término de diez días ante el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Zaragoza.—1.551.

V. Anuncios

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Instituto Nacional de Industria

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones del Instituto Nacional de Industria que a partir del próximo día 30 de abril procederemos al pago de 27,50 pesetas por cupón, correspondientes a los intereses que vencen en dicho día de nuestras obligaciones I. N. I.-Endesa, canjeables, segunda emisión, cupón número 1, e I. N. I.-Iberia, canjeables, segunda emisión, cupón número 1.

Los cupones se podrán presentar al cobro en:

Instituto Nacional de Industria, paseo de Salamanca, 8, Madrid.

Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro de España, Alcalá, 27, Madrid.

Empresa Nacional de Electricidad, S. A., Martínez Campos, 7, Madrid (solamente I. N. I.-Endesa).

Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., Rey Francisco, 21, Madrid (solamente I. N. I.-Iberia).

Así, como en los siguientes Bancos:

- Banco de Aragón.
- Banco de Bilbao.
- Banco Central.
- Banco Coca.
- Banco Comercial Transatlántico.
- Banco Español de Crédito.
- Banco Hispano Americano.
- Banco Ibérico.
- Banco Mercantil e Industrial.
- Banco Popular Español.
- Banco de Santander.
- Banco Urquijo.
- Banco de Vizcaya.
- Banco Zaragozano.

Madrid, 13 de abril de 1961.—El Instituto Nacional de Industria.—1.554.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Dirección General de Asuntos Consulares

ESPAÑOLES FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO

Consulado de España en Perpiñán

El señor Cónsul de España en Perpiñán comunica a este Ministerio el fallecimiento de Miguel Franco Muro, natural de Elscal (Huesca), hijo de Miguel y de Rosa, ocurrido el día 30 de octubre de 1958.

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegaciones Provinciales

VIZCAYA

Habiéndose extraviado un resguardo expedido por esta Caja de Depósitos de Vizcaya en 13 de octubre de 1952, con los números 57 de entrada y 2.032 de registro, correspondiente al depósito de 17.186 pesetas constituido por don Antenor Casanova Fernández a disposición del Instituto de la Vivienda para subasta de obras de construcción de doce viviendas protegidas en Basauri.

Se previene a la persona en cuyo poder se halle que lo presente en esta Caja de Depósitos, ya que están tomadas todas las medidas oportunas para que no se entregue el referido depósito si no a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto si transcurrieran, sin haberle presentado, dos meses desde la publicación de dicho anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de 19 de noviembre de 1929.

Bilbao, 7 de febrero de 1961.—El Delegado de Hacienda.—154.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Comisarias de Aguas

EBRO

Expropiaciones

Empresa concesionaria: Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., domiciliada en Barcelona en avenida de Cataluña, 2.

Obra: Salto de Llavorsi (canal en túnel, cámara de carga, tubería forzada, central con instalaciones anejas), Noguera de Cardós.

Término municipal: Llavorsi.

Expediente número 11

Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., ha solicitado la expropiación de los terrenos que se describen en la relación que se inserta a continuación, que considera necesarios para la construcción del canal en túnel, cámara de carga, tubería forzada, central con instalaciones anejas, del salto de Llavorsi (Noguera de Cardós).

Lo que se hace público para que durante el plazo de quince días los que se crean titulares de derechos sobre las fincas puedan oponerse por razones de forma o de fondo a la declaración de necesidad de ocupación. Cualquier persona podrá formular alegaciones a los efectos de subsanar posibles errores en la relación.

Las reclamaciones habrán de dirigirse a la Comisaría de Aguas del Ebro (paseo del General Mola, núm. 24), bien directamente o a través de la Alcaldía de Llavorsi (Lérida).

Zaragoza, 22 de marzo de 1961.—El Comisario Jefe, J. Reguart.—2.602